

Palabras del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, al dar a conocer la Recomendación 14/12, dirigida al presidente municipal de Tonalá, Antonio Mateos Nuño, por violación del derecho a la libertad personal, igualdad y al trato digno y discriminación. Guadalajara, Jalisco, 24 de mayo de 2012

El 15 de abril de 2011, una mujer presentó queja en contra de policías de Tonalá y del médico municipal. Señaló que un día antes había sido interceptada en su vehículo, la detuvieron y trasladaron a los separos municipales donde el galeno la obligó a desnudarse, a hacer sentadillas y le tomaron una fotografía.

Relató que la separación de su pareja sentimental originó entre ellas problemas legales, por lo que valiéndose de algunos policías que son sus amigos, la otra mujer mandó que la detuvieran y se burlaran de ella, pues en el arresto un gendarme le decía que se saliera de casa de su exnovia, que le pidiera perdón y que con eso la dejarían ir.

Tras las primeras investigaciones, la Comisión acreditó que fueron los elementos de la Dirección de Seguridad Pública de Tonalá, Adán Villaseñor Raygoza y Salvador Ruiz Monsiváis quienes participaron en los hechos señalados.

Aunque en sus informes los policías justificaron la detención diciendo que la expareja de la agraviada la había acusado de insultarla y retarla a golpes, de acuerdo con el análisis de la queja, los informes de los policías y las declaraciones de los testigos, no hay indicios que apoyen ese señalamiento; al contrario, según los testimonios, la agraviada fue detenida sin motivo legal. Con ello cobra fuerza la hipótesis planteada por la quejosa en el sentido de que los servidores públicos fueron utilizados por su expareja para resolver de manera ilegal los problemas que ellas tienen y que se ventilan en instancias judiciales.

Por otra parte, hay serias contradicciones entre el informe de policía 0636/2011, y el rendido ante la Comisión por los uniformados, pues en el primero refieren que la quejosa se encontraba como a cinco metros de donde estaban ellos, mientras que en el segundo señalan que le dieron persecución en la patrulla a la agraviada y procedieron a su detención.

Es lamentable que los cuerpos policiales municipales, siendo la autoridad encargada de prevenir los delitos, sean quienes los cometan. Esto lleva a reflexionar sobre el adiestramiento y la calidad humana de los gendarmes de Tonalá, pues no se puede entender que a quien le corresponde velar por la tranquilidad y derechos de los tonaltecas, esté vulnerando continua y sistemáticamente sus derechos humanos.

En cuanto a la actuación del médico municipal, aunque refirió que la inconforme había sido revisada en el área especial para mujeres, este organismo constató que no existe dicha área como tal, sino que es mixta. Asimismo, en su primer informe reconoció haberle ordenado a la quejosa que se desvistiera para realizarle un parte de lesiones. Dijo que solamente le indicó que se levantara la blusa y se bajara los pantalones, no las pantaletas,

pero de igual forma nada justifica que haya dado esta orden, ya que la quejosa no declaró haber sufrido agresiones físicas por parte de los policías.

La conducta irregular en la que incurrió el médico municipal Javier Cuevas Chávez, quedó acreditada con sus contradicciones y el dictamen psicológico elaborado por el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, en el que se revela que la inconforme sufrió una afectación emocional, tales como desconfianza, frustración, baja autoestima, desilusión, reacción de impotencia, sentimiento de culpa, miedos, angustia, depresión y barreras en la sexualidad.

Respecto a la alcaide Rebeca García Sánchez, la Comisión estima que por el hecho de presenciar estos actos degradantes sin intentar detenerlos, también es responsable, pues recordemos que son violadores de derechos humanos los servidores públicos que cometan acciones u omisiones en el ejercicio de sus funciones.

Es indudable que el médico municipal de guardia ordenó a la agraviada que se desnudara e hiciera sentadillas con el único fin de mofarse de sus preferencias sexuales, pues no venía al caso que se quitara su ropa interior, ya que la detención se debió a que supuestamente estaba alterando el orden público.

También los policías se burlaron de ella por sus preferencias sexuales, hablando con claves para que no se diera cuenta de tal acción. Sin embargo, fue inevitable que no se percatara, pues el escenario que estaba viviendo era demasiado humillante y grotesco; cuando los gendarmes eran interrogados por sus compañeros acerca de la detenida, estos contestaban con una clave mientras reían, lo que provocaba las burlas de todos.

Esta Comisión ha dejado claro en anteriores recomendaciones que la discriminación por preferencias sexuales es reprochable, pues demuestra una capacidad muy pobre de elegir valores ante una universalidad de opciones, máxime cuando la intolerancia viene de parte del Estado a través de sus servidores públicos.

Con las pruebas que obran en el expediente se demuestra que la ofendida jamás cometió falta administrativa o delito alguno, pues aunque en el informe de policía se haya asentado que la quejosa estaba alterando el orden público, no ofrecieron prueba ninguna que fortaleciera tal hipótesis.

Por lo tanto, los elementos de la Dirección General de Seguridad Pública de Tonalá, Salvador Ruiz Monsiváis, Adán Villaseñor Raygoza y Rebeca García Sánchez y el médico municipal de guardia Javier Cuevas Chávez no solo quebrantaron los derechos humanos a la libertad personal, a la igualdad, al trato digno y a la no discriminación, sino que con todo ello faltaron a su obligación de servidores públicos al no actuar con la máxima diligencia y profesionalismo en el desempeño de su encargo.

Por ello, esta Comisión emite las siguientes:

Recomendaciones

A Juan Antonio Mateos Nuño, presidente municipal del Ayuntamiento de Tonalá:

Primera. Inicie, tramite y resuelva un procedimiento administrativo de responsabilidad en contra de los policías Salvador Ruiz Monsiváis, Adán Villaseñor Raygoza y Rebeca García Sánchez, así como de Javier Cuevas Chávez, médico de los Juzgados Municipales.

Una vez concluido el procedimiento, realice el trámite necesario para que estas se inscriban en el Registro Policial Estatal a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública.

Segunda. Se adjunte copia de esta resolución al expediente de cada uno de los servidores públicos involucrados.

Tercera. Exhorte a los servidores públicos involucrados, así como a la totalidad de los funcionarios del ayuntamiento, para que en el ejercicio de sus funciones omitan realizar actos o expresiones discriminatorias.

Cuarta. Que el ayuntamiento que representa ofrezca una disculpa, como símbolo de resarcimiento al daño ocasionado a la agraviada en su persona y dignidad.

Quinta. Se impartan al personal de ese ayuntamiento cursos de capacitación y sensibilización en los temas de diversidad y orientación sexual y equidad de género y se incluyan dentro de los programas de atención ciudadana los temas de diversidad sexual y derechos humanos.

Sexta. Gire instrucciones a su director general de Seguridad Pública para que por ningún motivo y en ninguna circunstancia se realicen revisiones indignas o se les tomen fotografías a las personas que estén detenidas en los separos de dicha dirección.

Séptima. Instruya al director del DIF municipal, para que por conducto del área de psicología se le proporcione asistencia a la agraviada el tiempo que sea necesario, a fin de que supere el trauma y daño emocional. En su caso, que se le paguen los servicios de un profesional particular que ella elija.

La autoridad a la que se dirige la presente Recomendación tiene diez días hábiles, contados a partir de la notificación correspondiente, para que informe a este organismo sobre su aceptación.